



POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA UNA NULIDAD

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PEREIRA (E), en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia, y considerando los siguientes,

ANTECEDENTES

Que, el 05 de mayo de 2020, la Inspección Veinte Municipal de Policía de Pereira recibió el comparendo No. 66-01-020785 del 29/04/2020, impuesto a las 17:45 horas por la patrullera Mónica Alejandra Gómez con placa policial No. 038943, a la señora **JEYDI CATALINA ALVAREZ GALVIS**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.004.753.351, por incurrir en el comportamiento contrario a la convivencia ciudadana descrito en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 del 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, por cuanto "*desacata el decreto 443 del 26/04/2020 referente al pico y cedula sin justificación válida*", determinándose como medida correctiva: Multa General tipo 4 y Participación en Programa Comunitario o Actividad Pedagógica de Convivencia.

Que, no se observa dentro del expediente manifestación o documento que permita evidenciar que, en cumplimiento del trámite del proceso verbal abreviado, **JEYDI CATALINA ALVAREZ GALVIS** fue citada a la audiencia pública de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 para llevar a cabo la diligencia y para aportar las pruebas que pretendiera hacer valer.

Que, a través de la Resolución No. 369 del 08 de octubre de 2020, "*Por medio de la cual se impone una medida correctiva*" se señaló:

"...revisada la orden de comparendo N° 66-01-020785 del día 29 de abril de 2020 y sus anexos no se encuentran causales que conduzcan a establecer su incorrecto diligenciamiento o pruebas que conlleven a la inexistencia del comportamiento contrario a la convivencia que dio origen al procedimiento.

Que consecuencia de lo anterior, el infractor al no presentarse oportunamente y no ejercer su defensa a través del recurso de objeción, el despacho se constituye en audiencia y entra a decidir de fondo el asunto, dando por ciertos los hechos que dieron lugar a la orden de comparendo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 223 de la ley 1801 del 2016..."

Que, con base en lo anterior, la Inspección Veinte Municipal de Policía resolvió:

"PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al señor (a) **JEYDI CATALINA ALVARES GALVIS** identificado (a) con la cédula de ciudadanía número **1.004.753.351** del comportamiento contrario a la convivencia descrito en el **ARTICULO 35 NUMERAL 2** en virtud de la orden de comparendo N° **66-01-020785** el día 29 de abril de 2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.



POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA UNA NULIDAD

SEGUNDO: IMPONER al señor(a) **JEYDI CATALINA ALVARES GALVIS**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número **1.004.753.351** como medida correctiva **MULTA TIPO 4** por infracción al **ARTICULO 35 NUMERAL 2** por valor de **NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS (\$936.322)** con intereses moratorios de 162 días **POR VALOR CIENTO SESENTA Y DOS MIL PESOS (\$162.000)** liquidado desde fecha del 29 de abril de 2020, al 08 de octubre de 2020.

TERCERO: Consecuente con lo anterior **ORDENAR** al señor(a) **JEYDI CATALINA ALVARES GALVIS** identificado(a) con la cédula de ciudadanía número **1.004.753.351** pagar a favor del Municipio de Pereira la suma de **NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS (\$936.322)** con intereses moratorios de 162 días **CIENTO SESENTA Y DOS MIL PESOS (\$162.000)**, la cual deberá ser cancelada dentro del mes siguiente conforme al artículo 182 de la ley 1801 de 2016, en las instalaciones del Centro de Servicios Oportuno ubicado en el Edificio Torre Central oficina 104 de esta ciudad; so pena de hacerse acreedor al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente.

CUARTO: Transcurridos Noventa (90) días pese la notificación personal de la imposición de la multa y su ejecutoria sin que esta hubiera sido pagada por el señor(a) **JEYDI CATALINA ALVARES GALVIS** identificado(a) con la cédula de ciudadanía número **1.004.753.351** procédase a **REMITIR** el presente acto, el cual constituye título ejecutivo, ante la Tesorería Municipal de Pereira para su respectivo cobro coactivo.

QUINTO: Previo a la remisión del acto para la gestión del cobro coactivo **LIQUÍDENSE** los intereses moratorios a que hubiere lugar, liquidación que hará parte integrante de la presente resolución.

SEXTO: Contra la presente decisión procede recurso de la reposición y en subsidio apelación. La presente decisión es notificada en estrados a la compareciente conforme al artículo 223 del CNSCC."

Que, el documento contentivo de la decisión, aparece suscrito por la presunta infractora y marcado con "X" sobre la opción "SI" interpone recurso, sin que se tenga claridad de si se trata del recurso de reposición y en subsidio apelación o si se trata únicamente del recurso de apelación.

Que, sin ninguna otra manifestación, mediante oficio No. 45942 del 13 de octubre de 2020 se remitió el proceso a la Subsecretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana para que en esta instancia se desate el recurso de apelación.

Que, el expediente fue recibido el 14 de octubre de 2020, y de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 el Despacho dispuso la fijación en cartelera de la constancia con radicado No. 41312 del 11 de noviembre de 2020, a efectos de dar publicidad al término del que dispuso la parte apelante en el proceso para sustentar el recurso de apelación, el cual corrió entre los días 12 y 13 de noviembre de 2020, dentro de los cuales no se allegó sustentación al recurso.

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Noviembre 14 de 2017

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA UNA NULIDAD

procesales exigidas para el trámite del proceso verbal abreviado, como se expondrá a continuación:

El artículo 29 de la Constitución Política establece que el derecho fundamental de debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones tanto judiciales como administrativas, y bajo su cobertura se asegura que los sujetos procesales conozcan las etapas y pasos a seguir dentro de los procedimientos preexistentes ante los cuales se encuentran sometidos, de ahí que, las actuaciones administrativas deban estar ajustadas a derecho, respetando de manera efectiva las garantías de los ciudadanos en aras de proteger los derechos de los administrados.

Por su parte, la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia, determina dentro de sus objetivos específicos, el de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio nacional, en ese sentido este compendio normativo es una herramienta con la que cuentan todos los habitantes y las autoridades para resolver los conflictos que afectan la convivencia; en dicha norma también se establecen los comportamientos contrarios a la convivencia, las medidas correctivas, el procedimiento aplicable, entre otros.

En relación con las atribuciones y competencias, según el artículo 206 numeral 6 literal h), a los inspectores de policía les corresponde conocer en primera instancia de la medida correctiva de "multas", y de conformidad con el artículo 205 numerales 8 y 14, es atribución de los alcaldes resolver el recurso de apelación en el procedimiento verbal abreviado en relación con las medidas correctivas que aplican los inspectores de policía en primera instancia y, resolver el recurso de apelación de las decisiones tomadas por las autoridades de Policía también en primera instancia.

Ahora bien, se evidencia que el asunto de marras versa sobre la imposición de la medida correctiva de Multa General Tipo 4 que aparece en la Orden de Comparendo No. 66-01-020785 del 29/04/2020 en contra de JEYDI CATALINA ALVAREZ GALVIS, que por tratarse de un asunto relacionado con la imposición de dicha medida correctiva por la configuración de un comportamiento contrario a la convivencia ciudadana, a quien le corresponde decidir en primera instancia es al inspector de policía, siendo obligatoria la observancia del trámite establecido para ello, esto es, el procedimiento verbal abreviado del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en respeto por las garantías procesales del presunto infractor y su derecho al debido proceso.

Al tenor de la disposición *idem*, la autoridad de policía debe realizar la debida notificación de la citación a la audiencia pública, para que en el desarrollo de la misma el presunto infractor tenga la oportunidad, en el tiempo estipulado en la norma, de presentar sus descargos y solicitar las pruebas pertinentes, acto seguido la autoridad de policía debe adelantar la etapa probatoria y, finalmente, previa la

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA UNA NULIDAD

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Competencia

De conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 14 del artículo 205 de la Ley 1801 de 2016, una de las atribuciones del Alcalde Municipal es la de resolver el recurso de apelación en las decisiones tomadas por las autoridades de policía, en primera instancia, siempre que no sean de competencia de las autoridades especiales de policía.

Problema Jurídico

Procede el despacho a pronunciarse con el fin de establecer si la actuación de la Inspección Veinte Municipal de Policía se realizó en observancia a las disposiciones legales para tal fin, Ley 1801 de 2016.

Pruebas

Obra dentro del expediente el siguiente material probatorio:

- Orden de comparendo No. 66-01- 020785 del 12/04/2020 (fl. 1)

Caso concreto

La Inspección Veinte Municipal de Policía de Pereira en audiencia pública celebrada el 08 de octubre de 2020, resolvió declarar responsable a la señora JEYDI CATALINA ALVAREZ GALVIS del comportamiento contrario a la convivencia descrito en el numeral 2 del artículo 35 de la Ley 1801 de 2016 en virtud de la Orden de Comparendo No. 66-01-020785 del 29/04/2020, e impuso como medida correctiva la Multa tipo 4.

Por su parte, aparece en la Resolución 369, documento contentivo de lo ocurrido en la audiencia pública del 08 de octubre de 2020, que JEYDI CATALINA ALVAREZ GALVIS interpuso recurso en contra de la decisión tomada.

En este punto, este Despacho pone de presente que se pronunciará respecto el trámite impartido por la Inspección Veinte de Policía, y no adoptará decisión de fondo con relación al recurso de apelación interpuesto por JEYDI CATALINA ALVAREZ GALVIS en contra de la decisión tomada el 08 de octubre de 2020, en razón a que se evidenció que la actuación desplegada por la autoridad de policía está viciada de causal de nulidad constitucional por violación al debido proceso, al desconocer el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 y prescindir de las formas

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Noviembre 14 de 2017

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA UNA NULIDAD

notorios o de negaciones indefinidas, se podrá prescindir de la práctica de pruebas y la autoridad de policía decidirá de plano. Cuando se requieran conocimientos técnicos especializados, los servidores públicos del sector central y descentralizado del nivel territorial, darán informes por solicitud de la autoridad de policía.

d. Decisión. Agotada la etapa probatoria, la autoridad de policía valorará las pruebas y dictará la orden de policía o medida correctiva, si hay lugar a ello, sustentando su decisión con los respectivos fundamentos normativos y hechos conducentes demostrados. La decisión quedará notificada en estrados.”

Adicional a lo anterior, se evidencia que con las actuaciones llevadas a cabo por la Inspección veinte de Policía de Pereira, se vulnera el debido proceso establecido en el artículo 29 Superior: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. En virtud de tal disposición, se reconoce el principio de legalidad como pilar fundamental en el ejercicio de las funciones por parte de las autoridades judiciales y administrativas, máxime, las autoridades policiales, que son quienes por naturaleza cumplen y hacen cumplir la ley; de ahí la razón por la cual están obligadas a respetar las formas propias de cada juicio y asegurar la efectividad de todas aquellas normas que permitan a los ciudadanos presentar, solicitar y controvertir pruebas que, en últimas, garanticen el ejercicio efectivo del derecho de defensa.

Es importante resaltar lo establecido por la Honorable Corte Constitucional con en la Sentencia C-371/11, M.P.: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA, respecto al principio de contradicción, en donde dispone:

“DERECHO DE CONTRADICCION.

Esta Corporación ha explicado que el derecho al debido proceso se descompone en varias garantías que tutelan diferentes intereses ya sea de los sujetos procesales, o de la colectividad a una pronta y cumplida justicia. Entre ellas, el artículo 29 de la Constitución, en forma explícita consagra tanto el principio de celeridad, como el derecho de contradicción y controversia probatoria. Al respecto dicha norma señala que toda persona tiene derecho “a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”. Por su parte, el artículo 228 superior prescribe que “los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”. En desarrollo de estos principios, de un lado los procesos deben tener una duración razonable y, de otro, deben establecer mecanismos que permitan a los sujetos procesales e intervinientes controvertir, en condiciones de igualdad, las pruebas presentadas, así como los argumentos de hecho y de derecho que se aduzcan en su contra. Ha

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA UNA NULIDAD

valoración de las pruebas y exposición de motivos, debe decidir sobre la orden de policía o medida correctiva, notificar en estrados, y dar el trámite correspondiente a los recursos que proceden.

De cara con el caso que nos ocupa, como se expuso en el aparte de los antecedentes, dentro del expediente no obra constancia de citación a la presunta infractora para llevar a cabo la audiencia pública y aportar las pruebas que pretendiera hacer valer, y, pese a que la Inspección Veinte de Policía de Pereira se constituyó en audiencia pública el 8 de octubre de 2020 y la Resolución No. 369 aparece suscrita por la ciudadana, no se evidencia por parte de este despacho que en el desarrollo de la misma se le ofreciera la oportunidad de rendir sus argumentos y ejercer su defensa, ni de presentar y solicitar la práctica de pruebas o controvertir las que existieran dentro del proceso.

La actuación de la Inspección Veinte municipal de policía, al no citar al presunto infractor a la audiencia pública, yerra al desconocer los preceptos del artículo 223 # 2º de la ley 1801 de 2016, el cual establece:

“Citación. Las mencionadas autoridades, a los cinco (5) días siguientes de conocida la querella o el comportamiento contrario a la convivencia, en caso de que no hubiera sido posible iniciar la audiencia de manera inmediata, citará a audiencia pública al quejoso y al presunto infractor, mediante comunicación escrita, correo certificado, medio electrónico, medio de comunicación del que disponga, o por el medio más expedito o idóneo, donde se señale dicho comportamiento...” (Subrayado fuera de texto)

Así mismo, desconoció lo establecido en el numeral 3º literales A, C y D ejusdem, el cual establece:

“3. Audiencia pública. La audiencia pública se realizará en el lugar de los hechos, en el despacho del inspector o de la autoridad especial de policía. Esta se surtirá mediante los siguientes pasos:

a. Argumentos. En la audiencia la autoridad competente, otorgará tanto al presunto infractor como al quejoso un tiempo máximo de veinte (20) minutos I para exponer sus argumentos y pruebas.

c. Pruebas. Si el presunto infractor o el quejoso solicitan la práctica de pruebas adicionales, pertinentes y conducentes, y si la autoridad las considera viables o las requiere, las decretará y se practicarán en un término máximo de cinco (5) días. Igualmente, la autoridad podrá decretar de oficio las pruebas que requiera y dispondrá que se practiquen dentro del mismo término. La audiencia se reanudará al día siguiente al del vencimiento de la práctica de pruebas. Tratándose de hechos



Versión: 01

Fecha de Vigencia: Noviembre 14 de 2017

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA UNA NULIDAD

ARTÍCULO QUINTO: DEVOLVER el expediente a la Inspección Veinte Municipal de Policía de Pereira para lo de su competencia.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


ÁLVARO ARIAS VÉLEZ
Alcalde de Pereira (E)


LUZ ADRIANA RESTREPO RAMÍREZ
Secretaría Jurídica

Elaboró y proyectó: Isabel Cristina Meneses Cardona

Abogada Contratista ✓

Revisión legal: Katherine Aguilar Patiño

Profesional Universitario – Secretaría Jurídica

V. B. ROSA MARCELA GALARZA MUÑOZ
Directora Operativa Asuntos Legales (E)



POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA UNA NULIDAD

destacado así mismo la jurisprudencia que en el proceso de producción del derecho, como en el de su aplicación, las distintas garantías que conforman la noción de debido proceso pueden entrar en tensión. Así, en ciertos casos el principio de celeridad puede entrar en conflicto con la garantía de contradicción probatoria, o con el derecho de defensa, pues un término judicial breve, naturalmente recorta las posibilidades de controversia probatoria o argumentativa. Al respecto la jurisprudencia ha señalado que las garantías procesales son prevalentes, y no pueden verse limitadas por los operadores jurídicos."

Por lo anterior, al advertir la inobservancia del procedimiento prescrito en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, dentro del proceso verbal abreviado adelantado con ocasión de la Orden de Comparendo No. 66-01-020785 del 29/04/2020, y al encontrarse ante el aparente desconocimiento de derechos fundamentales de la presunta infractora, se hace necesario declarar la nulidad de lo actuado por la Inspección veinte, a partir de la actuación celebrada el 8 de octubre de 2020 (resolución 369), para que en consecuencia se rehaga la actuación de conformidad con la normativa aplicable y se garantice el cumplimiento de las etapas procesales pertinentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la actuación administrativa desde la audiencia pública adelantada el día 08 de octubre de 2020 (Resolución 369), proferida por la Inspección Veinte Municipal del Policía de Pereira dentro del proceso con radicado No. 931B-2020, donde actúa como presunta infractora **JEIDY CATALINA ALVAREZ GALVIS**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.004.753.351, por las razones expuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: REHACER la actuación con observancia al debido proceso y de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable, en especial el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, dejando a salvo las pruebas recaudadas legalmente.

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR que contra esta resolución no procede recurso alguno.

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR la presente resolución a las partes y/o sus apoderados, y al delegado del Ministerio Público designado para tal fin.

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Noviembre 14 de 2017

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA UNA NULIDAD

NOTIFICACION PERSONAL

Notificación personal que hago hoy _____ de 2021
a _____, identificado (a) con
cedula de ciudadanía número _____ de _____ del
contenido de la resolución número _____ de 2021, se deja constancia
de la entrega de copia íntegra y gratuita de la precitada resolución.

Se Informa que contra el acto administrativo que se notifica no procede recurso
alguno.

EL NOTIFICADO
C.C

QUIEN NOTIFICA
C.C

NOTIFICACION PERSONAL

Notificación personal que hago hoy _____ de 2021
a _____, identificado (a) con
cedula de ciudadanía número _____ de _____ del
contenido de la resolución número _____ de 2021, se deja constancia
de la entrega de copia íntegra y gratuita de la precitada resolución.

Se Informa que contra el acto administrativo que se notifica no procede recurso
alguno.

EL NOTIFICADO
C.C

QUIEN NOTIFICA
C.C

NOTIFICACION MINISTERIO PÚBLICO

Notificación personal que hago hoy VEINTE (20) ABRIL de 2021
a MARIA ELENA CALLE GARCIA, identificado (a) con
cedula de ciudadanía número 41961681 de ARMENIA del
contenido de la resolución número 1461 DE ABRIL de 2021, se deja constancia
de la entrega de copia íntegra y gratuita de la precitada resolución.

Se Informa que contra el acto administrativo que se notifica no procede recurso
alguno.



EL NOTIFICADO
C.C 41.961.681

QUIEN NOTIFICA
C.C

| | |
|--------------------------|--------|
| PERSONERÍA DE PEREIRA | |
| Correspondencia Recibida | |
| FECHA DE RADICACIÓN | |
| 13 ABR 2021 | |
| RADICADO | 001018 |
| FOLIOS: | -5- |
| Radicador | cfm |
| Hora | 4:35 |

